

LA LUCHA POR EL GASTO PÚBLICO

Por Francisco FERNANDEZ ORDÓÑEZ

Desde 1950, y con carácter general, el crecimiento del sector público ha sido una característica de las sociedades industriales modernas. En algún caso, como en Suecia, durante los últimos veinticinco años el gasto público ha crecido a una tasa que es el doble de la tasa de aumento de la producción total del país.

El fenómeno se ha agudizado en los últimos años en algunos países cuyo sector público era relativamente pequeño y equilibrado, pero que está acusando fuertemente el impacto de la crisis. Como resultado de esta situación, en Italia el déficit del sector público se sitúa en torno al 13 por 100 del PIB. En España, aunque aún por debajo del 3 por 100 del PIB, la línea de tendencia se ha marcado claramente. Los factores desencadenantes son:

— Las presiones del sector privado, que reclama mayor gasto público en forma de ayudas a actividades o incluso a empresas en crisis, subvenciones de interés, desgravaciones fiscales por encima de las cifras reales, compensaciones por elevaciones de precios de primeras materias o por límites oficiales a las alzas de precios.

— Las presiones crecientes hacia un nivel mayor de atenciones sociales y servicios públicos, coincidentes con un grado mayor de sensibilidad hacia las prestaciones colectivas y una valoración prioritaria por la sociedad de este tipo de servicios.

— Aumentos de burocracia que constituyen gastos recurrentes de inversiones públicas o que son resultado de la rigidez funcional del aparato administrativo. El 43 por 100 del presupuesto del Estado son gastos burocráticos, sin que de ninguna manera pueda afirmarse con carácter general que el nivel de retribuciones de nuestros funcionarios es suficiente.

— Pérdidas de empresas públicas en progresión geométrica, generalmente como consecuencia de limitaciones artificiales de tarifas o del mantenimiento sin reestructuración de actividades no rentables.

— Aumento de gastos por desempleo con un sistema todavía no perfeccionado en que ni todos los parados cobran el desempleo ni todos los que cobran el desempleo están parados.

— Parkinsonismo administrativo por creación de servicios u organismos no estrictamente justificados, con su secuela de teléfonos, secretarías, gabinetes y automóviles.

— Aumento de gastos locales por des-

bordamiento de la presión social en la demanda de servicios municipales.

Hace varios años escribí en esta misma página que la sociedad española estaba acumulando sobre el sector público una sobrecarga de exigencias con enorme fuerza expansiva. Esta sobrecarga de exigencias, que el Poder político trata difícilmente de contener; esta «revolución de las reivindicaciones crecientes» de todos los sectores sociales, dramáticamente exacerbada por la crisis energética, nos plantea un problema político fundamental que, unido a otros parecidos, se sitúa en el vértice de la estrategia económica. El sector público puede convertirse en el desagadero de muchos problemas que la sociedad no ha sido capaz de abordar. Al endosar los problemas al Estado no los estamos resolviendo, sino aplazando, porque, en definitiva, como sabemos desde Fernández Villaverde, la Hacienda Pública no es algo distinto de todos nosotros.

El fenómeno ha sido analizado por algunos autores como Habermas u O'Connors al definir el gasto público como el escenario de una nueva lucha de clases cuyos protagonistas no son los capitalistas y los trabajadores, sino las diferentes esferas o sectores de poder dentro de la sociedad. Cada uno de ellos, grupos de presión, sectores, regiones, pugna por una parcela del gasto, y al final la asignación definitiva de los recursos públicos depende, como es usual en la política, no sólo de razones científicas o técnicas, sino de la efectiva correlación de fuerzas. Así, Bell, en su libro «The cultural contradictions of capitalism», destaca cómo «el gasto público, y no el reparto de beneficios dentro de la empresa, se convierte en el ámbito principal de las decisiones económicas».

Esta realidad, característica de los Estados modernos, justifica el papel fundamental que debe asignarse a la evolución previsible de las distintas partidas del gasto público dentro de los programas económicos de los Gobiernos. El problema es tan simple como esto: tenemos que construir un sistema económico capaz de movilizar nuestro potencial de crecimiento y de progreso; pero no tenemos recursos para alcanzar a la vez todos los objetivos. Si el ejercicio de las prioridades, es decir, saber escoger, es el primer mandato de la política, en este momento la necesidad de optar es inequívoca.

Quienes hablamos de un programa de medio plazo para la economía española estamos refiriéndonos a una técnica de clarificación que debe interpretar democráticamente las alternativas que nos plantea una crisis mundial de proporciones gigantescas. En este cuatro tiene sentido la programación flexible de la estructura de gasto, su contenido interno y su ritmo. Porque el gasto público es una realidad instrumental y tiene sentido y legitimación en función de los objetivos a que sirve. Desgraciadamente, los españoles tendremos que renunciar para los tiempos que se acercan —que ya han llegado— a las delicias del Estado-providencia: cada uno para sí mismo; el Estado para todos».